

PERU: Nos-OTROS/ Nos-OTRAS y el lenguaje de la violencia

Reflexiones en torno a las repeticiones y alternativas frente al uso de la violencia en los conflictos sociales

Las muertes de peruanos –de indígenas y policías- nos duelen e interpelan. El 5 de junio fuimos testigos de otro hecho de violencia que nos devuelve que ese capítulo de nuestra historia no se ha cerrado, donde la muerte y el horror se repiten. Pensamos que esto se debe a la falta de reconocimiento y escucha, de un entendimiento mutuo y un olvido que nos remite a una incapacidad para elaborar y procesar nuestra historia. Esto nos afecta a todos y todas como sociedad causando dolor, estupor e indignación.

¿Qué nos ha ocurrido a las peruanas y peruanos, gobernantes, líderes y sociedad en su conjunto para mantener la historia de desencuentros y encuentros violentos? ¿Qué responsabilidad tenemos todos y todas en estos conflictos, como el que sucedió en Bagua?

Es necesario entender qué ocurrió, más aún, cuando hoy es contundente que esas muertes pudieron haberse evitado, si antes de actuar se hubiese priorizado el comprender la situación en su conjunto y con toda su complejidad. No es la primera vez que estamos ante una situación similar lo que nos permite constatar que no hemos aprendido de nuestra historia.

Estos sucesos tienen una dimensión política y social, pero también una dimensión subjetiva, expresada en la necesidad de una lectura de los hechos que de cabida a la complejidad de los comportamientos, sentimientos y reacciones. Con la intención de aportar a la comprensión de lo sucedido, queremos mencionar algunos puntos de reflexión:

Violencia y polarización

La violencia tiende a anular nuestra capacidad de pensar; ante ésta entramos en estados de confusión, dolor, rabia, impotencia e indignación que se mezclan con profundos sentimientos de vulnerabilidad. Estas consecuencias no permiten encontrar vías alternas para recuperar la estabilidad, el orden, la sensatez y la serenidad.

Plantear respuestas y reaccionar ante hechos como los sucedidos en Bagua sin un análisis crítico nos lleva a organizar la realidad en esquemas rígidos, dividiéndola entre buenos y malos e identificando culpables y víctimas (en este caso el Estado con sus fuerzas armadas y pueblo indígena amazónico, representarían los dos polos de este esquema).

Es así como buscamos ubicarnos en el bando “bueno”, distanciándonos del bando “perpetrador”, reforzando así una imagen incompleta y simplista que distorsiona la realidad, negando cualquier elemento que cuestione esta construcción. Los discursos así aparecen llenos de adjetivos peyorativos –por ejemplo: indígenas que son nombrados como salvajes y ciudadanos de segunda clase, gobierno genocida-, dando explicaciones que no recogen la complejidad del problema.

La polarización que se construye es utilizada políticamente para eludir los diferentes grados de responsabilidad que tiene cada actor sobre los hechos –el gobierno, las organizaciones sociales, las ONG, los medios de comunicación, las empresas, los

partidos políticos, la iglesia, la opinión pública- y no deja lugar para el pensamiento crítico ni el reconocimiento de los propios errores desde el rol que a cada uno le toca cumplir.

Todo esto refuerza la desconfianza en la institucionalidad, los líderes y los grupos sociales distintos al propio. Además afecta las posibilidades de encontrar mecanismos pacíficos para solucionar los conflictos y disminuye las opciones para encontrar agendas comunes que nos orienten a un desarrollo humano que refuerce identidades y promueva calidad de vida para toda la población, sin exclusiones.

Los hechos dan cuenta de que nuestra sociedad ha elegido la violencia como el lenguaje común, tanto para imponer el orden, como para buscar el reconocimiento y la interlocución. En ese sentido, la violencia es usada como la herramienta cuando no se puede dialogar o no se quiere negociar. Por un lado está la violencia del Estado que no respeta a la ciudadanía y que usa la represión como mecanismo de control y por otro, la respuesta violenta de la población, ante la permanente falta de escucha y respuesta efectiva a sus demandas.

Aceptar al otro/a como interlocutor/a como consecuencia de la coerción y no de la genuina voluntad de dialogar -que implicaría el reconocimiento de la validez de sus planteamientos- es un efecto perverso de la violencia. Los acuerdos tomados en este contexto no generan cambios de fondo y no cuentan con un verdadero respaldo a largo plazo, ya que no están basados en la aceptación de los otros como sujetos con necesidades diferentes, pero igualmente legítimas.

Un diálogo en estas condiciones tiende a buscar resultados inmediatos, dejando evidenciar su fin utilitario y evadiendo las problemáticas estructurales: una realidad de exclusión y discriminación permanente, la ausencia de mecanismos suficientes de protección para la defensa de los derechos de las y los indígenas que se ven amenazados, la demanda por reconocimiento como ciudadanos con derechos como peruanos y como pueblo indígena. Aquí el juego político cargado de estigmas y prejuicios muy fácilmente pasa de un discurso que condena y juzga a uno que convoca y llama "hermano/a" a quien antes tildó de "asesino/a".

Exclusiones, autoritarismos y represiones

Esclarecer lo ocurrido supone trascender la desconfianza y la polarización. Requiere tomar contacto con el dolor de las muertes y los daños ocurridos, que afectan principalmente a personas de los sectores históricamente más vulnerados en sus derechos, tal como lo recoge el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lo anterior nos impele a reflexionar sobre el sentido y las formas que toma la violencia en nuestro país. Considerando que la reflexión sobre el conflicto armado interno continúa siendo ignorada o rechazada, y se mantiene la resistencia a encarar esta situación y sus secuelas.

Lo ocurrido en la amazonia nos pone nuevamente de cara ante poblaciones excluidas por el Estado, quienes identifican que sus derechos no son respetados sino más bien violentados. Nos habla de que estas poblaciones están desarrollando diferentes estrategias para defender sus derechos, realizando importantes propuestas desde su identidad cultural. Lamentablemente, sólo cobran notoriedad a partir de las medidas de protesta radicales que entablan frente al gobierno central y la sociedad civil.

Los discursos oficiales –de la esfera política y medios de comunicación- tienden a minimizar la capacidad de estas poblaciones de tener autonomía en sus decisiones y de incidir en el poder político, más aún en asuntos centrales que les competen. Esto se repite una y otra vez en nuestra historia y pareciera que como sociedad no

consideramos a todos las y los ciudadanos como iguales, y que aún no estamos en la capacidad de reconocerlos en roles distintos a los tradicionalmente asignados. El racismo y la discriminación solapada son parte del discurso y la práctica cotidiana. No contamos con mecanismos eficientes de vigilancia y de defensa de los derechos, y para una parte de la población pareciera que éstos tienen que ser arrancados al poder político centralizado.

Un tejido social debilitado

¿Qué proyecto de desarrollo compartido puede construirse si no existe un tejido social cohesionado? ¿Cómo aportamos a la reconstrucción del tejido social si no somos capaces de hacer propuestas que partan del reconocimiento de la diversidad? ¿Cómo dialogar en un contexto en el que la desconfianza es el punto de partida frente a todo aquel que es diferente? Esto tiene como consecuencia una imposibilidad de acercarnos al otro, reconociendo las diferencias y encontrando puntos en común, lo que genera permanentes enfrentamientos y desencuentros.

A la base de este desencuentro están los diferentes discursos de país, de lo que somos y queremos ser. Éstos reflejan las diferentes representaciones sobre la realidad, dependiendo de las condiciones geográficas, culturales, sociales, de género, económicas e históricas desde las cuales éstas se construyen. Estas representaciones no dialogan entre sí o están en permanente confrontación, teniendo a la base relaciones de poder desiguales. No nos damos cuenta que en la medida que negamos parte de nuestra diversidad como país, estamos empobreciendo nuestra identidad pluricultural.

Por su parte el discurso oficial sólo reconoce las representaciones que están al servicio del sistema que propone y discrimina propuestas alternativas de desarrollo que entran en conflicto con su modelo hegemónico.

Algunas alternativas

Requerimos desarrollar mecanismos para la convivencia entre grupos sociales, lo que implica reconocer y respetar las diferencias, tender puentes y encontrar puntos comunes, recoger aprendizajes previos y poner énfasis en los procesos subjetivos a nivel individual y colectivo:

- ***Fortalecer el deseo e interés genuino de conocer al otro/a en su complejidad.*** Lo cual supone una previa auto reflexión: sobre la identidad, el origen, las expectativas y sueños de realización; sobre las motivaciones que nos llevan al encuentro con el otro/a; sobre nuestra historia. Esto implica indagar sobre lo que nos lleva al desencuentro y la exclusión de aquel que es diferente.
- ***Cuestionar los estereotipos y los prejuicios sobre la diversidad de nuestras poblaciones;*** y hacer una reflexión crítica acerca de cómo tradicionalmente nos hemos relacionado en una sociedad diversa pero desarticulada y autoritaria. Y cómo esta relación tiñe nuestra interacción cotidiana, que está cargada de prejuicios.
- ***Desarrollar una mirada intercultural,*** que parta de la empatía, teniendo una actitud que dé cabida a otro/a diferente pero valorado en términos iguales. Esto significa la capacidad de trascender los propios modelos de pensamiento y acción, para entender otros modelos culturales, valorarlos y aprender de ellos; y construir un modelo que incluya la diferencia y las necesidades de un otro.
- ***Contar con la capacidad de comunicar de manera clara y transparente*** mi identidad, propuestas y posiciones. Esto implica considerar la cultura del

interlocutor/a, pero también estar dispuesto a recibir la retroalimentación y la crítica en el diálogo.

- **Generar mecanismos de diálogo voluntario, de construcción de consenso y de toma de decisiones participativas** en procesos de largo plazo, en los que se trascienda la frontera del temor a abordar temas de fondo que lleven a proponer y realizar cambios estructurales.
- **Considerar que este diálogo requiere comprender la historia de violencia y relaciones de poder, que han mantenido a ciertos sectores siempre excluidos del modelo de país que se propone.** Esto significa encontrar canales adecuados que permitan la saludable expresión de emociones de rabia, impotencia, frustración, dirigidas al interlocutor/a que representa al poder que excluye, para construir una nueva manera de relacionarse.
- **Reconocer el impacto emocional y social que han tenido estos sucesos:** Reflexionar respecto de los efectos de este enfrentamiento que ha dejado terribles saldos de dolor en la subjetividad de todos; tanto de aquellos que se han visto enfrentados como de la sociedad en su conjunto, para favorecer la construcción de un dialogo genuino encaminado al reencuentro y reconciliación.
- **Incorporar en las políticas de Estado destinadas a la prevención y la gestión constructiva de los conflictos sociales los aspectos mencionados anteriormente.** Asimismo, garantizar que las instituciones responsables de la canalización de las demandas, así como las instancias intermedias de decisión cuenten con las capacidades de escucha, reconocimiento y valoración de la diferencia, interés genuino por conocer y reconocer al otro; requisito necesario para un proceso de diálogo y concertación.
- **Comprendernos como sociedad a la luz de las causas y efectos del conflicto armado** para no continuar con la historia de violencia e imaginar nuevas formas de relación no sólo entre todos y todas en igualdad, si no también entre la ciudadanía y el Estado. Ello requiere de un Estado que garantice los derechos humanos y sus principios de igualdad y no discriminación y de una sociedad protagonista en el ejercicio de sus derechos.

Grupo de Trabajo de Salud Mental
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Julio, 2009